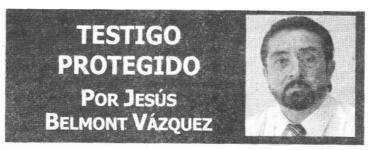


Fecha Sección Página 12.11.2009 Seguridad 25



PGR debe aplicar la ley

-Fraude con los recursos federales destinados a "Stan" -Damnificados piden justicia a cuatro años de distancia

l Consejo Regional de Damnificados de "Stan" y la Sociedad Civil del Soconusco del estado de Chiapas, exigieron al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, información de la situación actual que guarda la averiguación previa PGR/CHIS/TAP/II/111/09, así como del proceso penal respectivo.

Grupos de damnificados por el huracán "Stan" que azotó a la entidad sureña en octubre de 2005, presentaron una denuncia en la PGR en contra del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a quien acusan de haber malversado 11 mil millones de pesos de origen federal que debieron invertirse en la reconstrucción de 41 municipios que resultaron severamente dañados por el meteoro.

Los afectados denunciaron que aún la PGR no le da trámite a la citada querella interpuesta el pasado tres de abril en Tapachula, Chiapas.

Los quejosos recordaron que también existen denuncias interpuestas por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades observadas en las auditorías realizadas a la obra pública de la reconstrucción en Chiapas.

Los damnificados presumen que se viene encubriendo a Pablo Salazar y demás defraudadores, entre los que se encuentran diversas empresas constructoras y ex funcionarios como Ru-

bén Velázquez López, actual senador de la República; Horacio Schroeder Bejarano, ex secretario de Seguridad Publica y ex comisionado para la Reconstrucción; Leonardo Muñoz Arellano, ex subsecretario de Protección Civil; Ada Griselda Bonifaz Villar, ex titular de Obras Públicas de Chiapas; Socorro Domínguez Aguilar, ex titular del extinto Instituto de la Vivienda.

También mencionan a Carlos Cruz Coutiño, ex director del Comité de Construcción de Escuelas; Reybel Santos Romero, ex titular de la Comisión Estatal de Caminos; Mario Bustamante Grajales, ex director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento; María Cruz Hernández, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Igual se refieren a ex presidentes municipales como Ángel Barrios Zea, ex presidente municipal de Tapachula; Óscar Salinas Morga, ex munícipe de Suchiate y actual diputado local y Fernando Acosta Rincón, ex presidente municipal de Huixtla, entre otros.

Como es sabido, siendo gobernador de Chiapas, Pablo Salazar recibió de diferentes aportaciones federales y de organismos no gubernamentales, la cantidad de 11 mil 715 millones de pesos para la reconstrucción
de los 41 municipios afectados, aunque en algunos casos se habla de 13
mil millones y en otros de 20 mil millones de pesos, esta última cifra proporcionada por funcionarios de la Comisión Nacional del Agua.

Los afectados refieren que como resultado de sus reclamos de justicia ante la Cámara de Diputados, la Auditoria Superior de la Federación dio vista al Ministerio Público federal (PGR) y esta inició varias averiguaciones en contra de dependencias del

gobierno de Chiapas por anomalías en la aplicación de los recursos que debieron destinarse a la reconstrucción durante el gobierno de Salazar.

Algunas de las denuncias en contra de dependencias estatales, son la interpuesta en contra de la Secretaría de Caminos (PGR/CHIS/TGZ/-283/2008); Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (PGR/CHIS/TGZ-1/301/2008); Secretaría de Seguridad Pública (PGR/CHIS/TGZ-1/302/-2008) COCOES (/PGR/TGZ-1/303/2008); Instituto de la Vivienda (PGR/CHIS/TGZ-1/229/2008), así como al que fuera Ministerio de Justicia, hoy Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (FESP/-2008-6), esta última por tratarse de recursos del gobierno del estado.

Las conductas supuestamente fraudulentas de Pablo Salazar y sus más cercanos colaboradores que participaron en este acto de uso abusivo de poder, tanto de los fondos estafales como federales, dejaron en el total desamparo a miles de familias en municipios de la zona Costa, Soconusco, Sierra y La Frailesca. No obstante, los damnificados han hecho esfuerzos por reconstruir por su cuenta algunas viviendas y los servicios públicos.

Los denunciantes aseguran que las cicatrices de esa destrucción aún están presentes; el despilfarro y distracción de los recursos públicos destinados para paliar los daños sirvieron para que se enriquecieran en forma directa quienes estuvieron haciendo mal uso de ellos.

Los afectados comentaron que a



Página 1 de 2 \$.00 Tam: 358 cm2

Continúa en siguiente hoja



Fecha	Sección	Página
12.11.2009	Seguridad	25

Cámara de Diputados (2005-2006) para brindar atención a los municipios dañados, hasta el día de hoy, a cuatro años de distancia de aquella tragedia, la planta productiva de la zona costa sierra no ha podido levantarse de esa debacle.

Es una mentira que Pablo Salazar

pesar de los fondos que autorizó la haya dejado en un 94 por ciento la reconstrucción de la zona devastada, como en su momento el ex mandatario lo afirmó ante los medios de comunicación.

> Hoy se puede corroborar que la reconstrucción no ha concluido a pesar de las cantidades millonarias de recursos que se destinaron y que fueron a

parar a las cuentas bancarias de Pablo Salazar y miembros de su gobierno.

Mientras se siga siendo complaciente con los saqueadores del bien público, tenemos que hacer uso de los derechos que nuestras leyes nos permiten, nos comentaron integrantes del Consejo Regional de Damnificados de "Stan" y de la Sociedad Civil del Soconusco.